

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Exp. 05001-31-05-017-2021-00486-01

Resuelve la Sala la solicitud de aclaración y/o adición, presentada por la parte demandante, respecto de la sentencia de segunda instancia proferida el pasado 18 de mayo, en el proceso ordinario que adelantó en contra de EMPRESA PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-017-2021-00486-01).

ANTECEDENTES:

A través de memorial radicado el 23 de mayo de 2023 por medios virtuales, la parte demandante pidió la **aclaración y/o adición** de la providencia de segundo grado ya identificada, requiriendo que el Tribunal se pronuncie 1) sobre la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones ya que la pensión extralegal voluntaria es reconocida con el decreto 3 de 1976 y las actas de la Junta Directiva y 2) analizarse la forma como deben liquidarse ambas prestaciones para obtener la diferencia y de ese modo el mayor valor que corresponde reconocer a EPM como consecuencia de la compartibilidad pensional.

CONSIDERACIONES:

De acuerdo a lo solicitado, debe acudir al contenido del artículo 287 del Código General del Proceso. Esta disposición indica lo siguiente:

“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal”

Conforme a este mandado legal, esta Sala no encuentra razón para emitir algún pronunciamiento respecto del primero de los puntos referidos por el memorialista, en tanto lo que rodeó este litigio tuvo que ver específicamente con la prestación que se buscaba en virtud de lo dispuesto en el Decreto 3 de 1976, y si acudimos a las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias, el propósito de esta acción estaba encaminada a obtener la pensión voluntaria de parte de EPM o en subsidio la ilegalidad de la desafiliación que diera paso al pago de aportes en mora y consecuentemente se petitionó que Colpensiones pagara la pensión de vejez de acuerdo a lo que establece el Decreto 758 de 1990 con todo el tiempo, pero es que si no tuvieron prosperidad las pretensiones declarativas, ninguna injerencia tenía el fallador para pronunciarse sobre las consecuentes.

Ahora, como quiera que se verifica que la Juez si se pronunció sobre tal punto, es preciso en esta oportunidad señalar que el extinto ISS reconoció al actor la pensión de vejez bajo las condiciones de la Ley 33 de 1985 que exige 55 años de edad y 20 años de servicio, bastando ello para dar razón a los argumentos de la providencia consultada, toda vez que la prestación fue reconocida a partir del 28 de noviembre de 2012 luego de verificado el retiro del servicio cuando el señor Suárez Calle contaba con 58 años de edad de cara a los 60 años que exige el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 y el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por lo que no es posible que exista beneficio de una norma en cuanto a la edad porque lo que ocurrió a sus 58 años fue el disfrute, y se pretenda hoy el aprovechamiento de otra por razones del monto, lo que se apoya en el principio de la inescindibilidad de la norma que consiste en entender que las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse un asunto concreto, deben ser aplicadas en su integridad, no siendo del caso la existencia de un yerro en el reconocimiento de parte del ISS en su momento, que de viabilidad a asumir una eventual prestación mayor por la sumatoria de tiempos que permite tanto el Decreto 758 como la Ley 100 sobre todo, porque en el marco de su disposición reguladora para la época, la mesada pensional ingresó a su patrimonio desde dos años antes al tiempo de causación que las disposiciones que hoy se pretende sean aplicadas tienen previsto.

Sobre el segundo punto, se hace necesario precisar al apoderado judicial que la sentencia resultó desfavorable a los intereses del actor por encontrar que si bien pudo ser causada la prestación voluntaria contenida en el Decreto 3 de 1976 por satisfacción de los requisitos de edad y tiempo, el disfrute no llegó a materializarse, porque ante la ausencia de un pacto de compatibilidad de las pensiones, cuando se arribó a la exigencia contemplada desde la Junta Directiva de EPM para dar inicio a su otorgamiento referida al retiro del servicio que ocurrió el 27 de noviembre de 2012, pudo acceder desde ese mismo momento a la prestación económica del Sistema, lo que deriva en que en sentido estricto el actor nunca accedió a la pensión de jubilación del empleador y en ese orden, la

parte patronal no tuvo a su cargo reconocimiento pensional alguno, a partir de lo que se dejó con suficiente claridad definido en la providencia emitida por esta Sala que *“el ISS se subrogó en la obligación del empleador sin la posibilidad para el actor de optar en igual momento por la prestación extralegal dado el mencionado carácter de compartida de la prestación, cuya compatibilidad no fue pactada...”*, resultando por fuera de toda lógica que si el empleador por ausencia de los requisitos para su concesión no estuvo obligado a entregar la pensión de jubilación al señor Francisco Antonio Suárez, deba asumir el mayor valor que hubiera correspondido en el evento de haber podido acceder a ese derecho, no correspondiendo a esta colegiatura definir tal asunto para efectos de establecer la procedencia del recurso extraordinario de casación, puesto que si fue advertida la improcedencia de la pensión de jubilación pedida como se dijo, tanto por la senda de la aplicación simple del Decreto 3 de 1976, como por el camino de la omisión en el pago de aportes de cuenta de la desafiliación que ocurrió desde el 18 de julio de 1977, ningún cálculo respecto de lo que pudo haber percibido el demandante por ese concepto era responsabilidad de la Sala efectuar, por lo que ninguna manifestación adicional merecía la determinación adoptada sobre tal punto.


Por lo explicado, se dispone adicionar la providencia en lo que a los argumentos de la liquidación de la prestación que hoy persigue el demandante bajo las prerrogativas del Decreto 758 de 1990 atañe, sin que exista otro argumento por incluir en la decisión absolutoria revisada en consulta.

DECISIÓN:

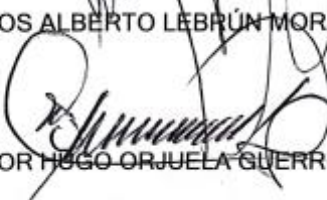
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **ADICIONA** la sentencia de segunda instancia del 18 de mayo de 2022, en lo que al tema de la reliquidación pensional se refiere, que deriva igualmente, en la confirmación de la sentencia consultada.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 91 fijados el 30 de mayo de 2023 En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

SECRETARIO